

CAPITULO 4

De la Legalización a la Justicia Racial

La Evolución de un Movimiento

*Todes estamos a favor de detener criminales....
¿Qué tal si detuviéramos y deportáramos
solo a les inmigrantes indocumentades que
representan una amenaza para la seguridad
pública?*

—Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Na-
cional de Inmigración, 4 de marzo,
2013

Poco después de que ICE (Servicio de inmigración y control de Aduanas, por sus siglas en inglés) liberara a más de 2,000 inmigrantes de centros de detención a nivel nacional, Ali Noorani del Foro Nacional de Inmigración (NIF por sus siglas en inglés) escribió las palabras del epígrafe de este capítulo en un artículo para Reuters. Les republicanes habían criticado a ICE por las liberaciones que tuvieron lugar antes de que los recortes automáticos de fondos entraran en vigencia durante la secuestro presupuestaria. Noorani

aparentemente tenía buenas intenciones en su intento de defender las liberaciones. Después de mencionar la detención de criminales, escribió, "Miguel Hernández, por ejemplo, fue arrestado después de ser detenido por no usar la señal de giro de su automóvil. No exactamente un delito criminal." Pero luego continuó tranquilizando cualquier preocupación sobre que Hernández estuviera libre: "Ni Hernández ni nadie más ha sido completamente liberado. Los detenidos transferidos están bajo supervisión, aún deben comparecer ante el tribunal y todavía están en proceso de deportación". Al resaltar estos puntos, Noorani reforzó la idea de que algunos inmigrantes merecen detención y deportación. Su razonamiento detrás de esto: han cometido un crimen que les hace indignos de estar en Estados Unidos. Miguel Hernández no era una de las "verdaderas amenazas" que, según Noorani, nosotros, como país, deberíamos estar enfocados en abordar. Noorani intentaba exponer los problemas con la detención masiva de inmigrantes, pero también intentaba influir en el debate en torno a la reforma migratoria integral (CIR, por sus siglas en inglés) que estaba en pleno apogeo en ese momento. Como explica en el artículo, "Las reacciones políticamente cargadas que siguieron a la transferencia de personas detenidas deberían canalizarse hacia la conversación productiva que ya está en marcha en el Congreso sobre un mejor proceso de inmigración" haciendo referencia al esfuerzo del CIR de 2013.¹

El artículo expone dos temas comunes en el movimiento convencional de derechos migrantes. En primer lugar, posicionó a la mayoría de los inmigrantes como "relativamente inocentes" y, por lo tanto, no merecedores del trato duro de ICE, mientras que otros son considerados criminales que deberían ser deportados. "No somos criminales", una frase demasiado familiar en el movimiento, refuerza estereotipos sobre "buenos inmigrantes" que merecen alivio frente a "males inmigrantes" que son desechables. Este eslogan no solo ha perjudicado nuestra

capacidad para desafiar las leyes y políticas migratorias racistas y xenófobas, sino que también evoca el racismo anti-Negro. Este encuadramiento ha fomentado así las divisiones entre el movimiento de derechos migrantes y el movimiento más amplio de justicia racial. Y un enfoque en los antecedentes penales afirma que la inmigración en sí misma es un problema de seguridad pública. A pesar de muchos esfuerzos para señalar por qué decir "No somos criminales" no solo es perjudicial para nuestros movimientos sino también una mala estrategia de comunicación, el eslogan perdura.

Segundo, el artículo de Noorani alude a lo que algunos líderes de derechos inmigrantes han llamado el estándar de oro de la lucha por los derechos inmigrantes: asegurar la legalización para los once millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Durante años, los Demócratas se enfocaron en aprobar la Ley de Reforma Migratoria Integral (CIR, por sus siglas en inglés), lo que significa que han estado dispuestos a hacer importantes concesiones con Republicanos para obtener la legalización para una parte de la población indocumentada. Las concesiones incluyeron intensificar la militarización de la frontera y aumentar la aplicación de la ley en el interior para deportar inmigrantes, justificado por la narrativa del buen inmigrante versus el mal inmigrante. En lugar de cuestionar esta línea de pensamiento, las organizaciones de defensa de la inmigración del Beltway (con sede en Washington, DC) que cuentan con muchos recursos, defendieron el marco de CIR y las representaciones del inmigrante trabajador y sacrificado que desea desesperadamente ser estadounidense frente a el peligroso y sin ley que debe ser excluido.

El debate sobre inmigración frecuentemente se centra en la noción de que, para obtener cierta legalización, también debemos aceptar cierta aplicación de la ley. Pero durante los años de Obama, un creciente

contingente del movimiento comenzó a rechazar este punto de vista. Atribuyo esta evolución a tres cambios clave que tuvieron lugar desde el primer mandato de Obama. En primer lugar, el uso más calculado por parte de la administración de Obama del sistema legal penal para arrestar, detener y deportar inmigrantes reveló los problemas más amplios con el complejo industrial penitenciario (PIC por sus siglas en inglés). Les activistas de derechos inmigrantes ya no podían ignorar la crisis de la encarcelación masiva y la policía racista en Estados Unidos. Estas se convirtieron en realidades cotidianas para las comunidades de inmigrantes. Del mismo modo, la conciencia del movimiento sobre problemas más amplios de justicia racial solo creció a medida que las protestas de las Vidas Negras Importan (conocido en inglés como Black Lives Matter) cobraban fuerza tras los asesinatos policiales en Ferguson, Baltimore y más allá. Los defensores que habían evitado hablar sobre raza, criminalización y su relación con el sistema de inmigración ahora se veían obligados a enfrentar las conexiones. Un creciente grupo de organizaciones contra la deportación y por la abolición de la detención finalmente encontró su rumbo a medida que se producían estos cambios. Luego llegaron las elecciones de 2016. La ascensión de Trump a la presidencia lo cambió todo. Ahora, no solo los márgenes del movimiento estaban afilando su comprensión de las intersecciones del sistema de deportación con el PIC, sino que también se expuso el racismo inherente de nuestro sistema de inmigración, e incluso las organizaciones nacionales moderadas tuvieron que reconocer la conversación que lo rodeaba.

En este capítulo me vuelvo hacia el movimiento de derechos inmigrantes y rastreo sus éxitos y fracasos durante el tiempo en que las organizaciones mejor financiadas priorizaron la legalización por encima de todo lo demás. Debemos ser conscientes de las fuerzas de derecha contra las que las comunidades de inmigrantes y quienes buscan migrar,

están luchando. La derecha nativista se ha vuelto más poderosa en las últimas décadas, y sus agendas xenófobas y restrictivas se han vuelto convencionales. El impacto ha sido alarmante. En lo que respecta al control fronterizo, algunos Demócratas han sucumbido a la ideología de aquellos que quieren acabar con el asilo de una vez por todas. Por eso debemos examinar constantemente nuestras tácticas y enfoques. ¿Cómo ha reforzado involuntariamente el movimiento de derecho de inmigrantes los ataques de la derecha, añadiendo combustible al fuego de sus argumentos? Al mismo tiempo, ¿cómo ha resistido y logrado contrarrestar el aumento de la detención y la deportación? Lo que presento en este capítulo (y los siguientes dos capítulos) apenas rasca la superficie del profundo trabajo de organización de movimiento que ha tenido lugar en los últimos veinte años. Aun así, muestra que desafiar la criminalización y avanzar más allá del marco de legalización fueron pasos críticos que permitieron a activistas de justicia inmigrante finalmente cambiar el rumbo de las deportaciones masivas.

El Movimiento por los Derechos Inmigrantes

Después del 9/11

Determinar el alcance exacto del movimiento por los derechos inmigrantes no es una tarea fácil. Desde principios de la década del 2000, la percepción comúnmente aceptada del propósito del movimiento es el esfuerzo por asegurar ciudadanía para los once millones de personas indocumentadas que viven en Estados Unidos. Este objetivo a menudo ha eclipsado cualquier otro objetivo. Pero hay mucho más en el movimiento que pasar un proyecto de ley de legalización. Para los inmigrantes indocumentados, estos objetivos han abarcado la obtención de licencias de conducir y el acceso a beneficios públicos, matrícula estatal

y salarios justos. Tanto para les inmigrantes indocumentades como para les no naturalizades, el movimiento ha priorizado estrategias para contrarrestar el creciente sistema de detención y deportación: luchando en campañas individuales de defensa contra la deportación, poniendo fin a las colaboraciones entre ICE y la policía, deteniendo la expansión de la detención y derogando algunas de las leyes que han hecho que las deportaciones se disparen en las últimas décadas. Otros grupos abogan por más asistencia para refugiades, reunificación familiar, mejores políticas de asilo y ayuda humanitaria para aquellos que buscan seguridad en la frontera. La lista sigue y sigue. A pesar de la naturaleza variada de la lucha por los derechos de inmigrantes, la demanda central para los grupos mejor financiados y las fundaciones que les apoyan sigue siendo la legalización. Para ellos, en teoría, si se aprobara la CIR, entonces muchos de los otros problemas que enfrentan les inmigrantes básicamente se resolverían.

La CIR surgió como un marco en la década de los 2000. En ese momento, el presidente George W. Bush estaba considerando una política que otorgaría amnistía a la población de inmigrantes indocumentades en Estados Unidos. El "gran acuerdo" incluiría un programa de trabajadores invitades y el apoyo de México para controlar los cruces fronterizos. Fue apodado "la enchilada completa" por el secretario de relaciones exteriores de México.² La lógica de la CIR, que intercambia el estatus legal para algunos "buenes inmigrantes" a cambio de la exclusión de "inmigrantes males", ha sido central para la reforma migratoria durante décadas. Tanto la Ley Hart-Celler de 1965 como el proyecto de ley de "amnistía" de Reagan de 1986 tenían disposiciones que apoyaban a algunos inmigrantes, pero también incluían cambios que dificultaban la migración futura y aumentaba la severidad de la aplicación de la ley. Aunque las amnistías siguen siendo vistas como un desarrollo positivo, "a menudo son eventos únicos que van acompañados de un endurecimiento de los controles de inmigración".³ También siempre tienen estipulaciones que impiden que ciertas personas se beneficien, por ejemplo, porque no cumplen con una fecha límite o porque tienen antecedentes penales.

Las organizaciones de defensa de la inmigración con sede en Washington DC permanecieron firmes en su compromiso de asegurar la legalización, lo que requeriría el apoyo bipartidista. Los grupos incluían el Centro para el Cambio Comunitario, el Foro Nacional de Inmigración y el Consejo Nacional de La Raza (NCLR, por sus siglas en inglés), entre otros. En un esfuerzo por construir apoyo bipartidista, las organizaciones centradas en la CIR a menudo evitaban la discusión sobre el racismo en relación con la inmigración y las causas fundamentales de la migración, aconsejando a otros que hicieran lo mismo. En una escena de "Cómo Funciona la Democracia Ahora", un documental sobre la campaña legislativa para la CIR a principios de la década del 2000, Frank Sharry, entonces director de NIF, explicó a un grupo de demócratas de Iowa que "lo que no funciona, en su mayor parte, es llamar racistas a tus oponentes". Luego evocó una versión sanitizada de la era de los derechos civiles, argumentando que Martin Luther King Jr. no convenció a "un público estadounidense muy escéptico sobre los derechos civiles" llamando a las personas "imbéciles racistas", sino evocando "el sueño americano" y "quiénes somos como nación [como] acogedores con todas las personas en la mesa de Dios".⁴

Mientras tanto, las redadas en comunidades de inmigrantes después del 11 de Septiembre estaban en aumento. En la ciudad de Nueva York, muchos residentes permanentes legales de países de Asia y el Caribe que habían tenido contactos previos con el sistema legal penal estaban siendo detenidos cada vez más y sometidos a procesos de deportación. El Proyecto de Defensa del Inmigrante, una organización legal sin fines de lucro que apoya a inmigrantes con antecedentes penales, y Families for Freedom, una alianza de familias que luchan contra la deportación, ambas se formaron en la ciudad de Nueva York después de los cambios en la política de inmigración en 1996 y después del 11 de Septiembre. Para equipar a inmigrantes para que se protegieran cuando ICE llamara a la puerta, las dos organizaciones desarrollaron juntas un plan básico de estudios sobre la Deportación. Este tipo de colaboración entre organizadores y abogados ha crecido a lo largo de los años y se ha convertido en una conexión crítica para luchar contra las duras políticas de inmigración. DWN se convirtió en un centro importante para

grupos como Familias for Freedom. La participación de organizaciones comunitarias e individuos que fueron directamente afectadas por las nuevas políticas después del 11 de Septiembre resultó ser un punto de inflexión crucial en el camino hacia la de DWN.

En el extremo opuesto del país, la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés) fue fundada en 2001 en Los Ángeles para apoyar a la organización de trabajadores inmigrantes. NDLON comenzó a presenciar cambios en la aplicación de la ley de inmigración a medida que más trabajadores inmigrantes eran detenidos por la policía local. Chris Newman, director legal de NDLON, escuchó por primera vez sobre el programa 287(g) cuando recibió una llamada de Salvador Reza, en ese momento organizador del Centro de Trabajadores Macahualli y futuro fundador de Puente, una organización de defensa de inmigrantes de base en Arizona. Reza llamó la atención sobre el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, y el nuevo programa federal que otorgaba autoridad de inmigración federal a sus diputades. NDLON comenzó a seguir la expansión de las asociaciones de ICE con la policía local a medida que la administración Bush implementaba varios programas 287(g) para hacer un blanco de jornaleros desde Alabama hasta Carolina del Norte y más allá.

Las redes como NDLON y DWN fueron fundamentales para los grupos de base que luchaban contra la creciente red para atrapar inmigrantes. Durante este período, yo trabajaba como organizadora en Grassroots Leadership en Texas, donde muy pocas personas en el ámbito de los derechos inmigrantes sabían sobre la detención de inmigrantes. Nos convertimos en miembros de DWN y asistimos a nuestra primera conferencia en 2005. De repente, no nos sentíamos tan aisladas. DWN proporcionaba puntos de discusión, hojas informativas y análisis legislativo que nos ayudaron a abogar contra la detención en Texas. Para mi

colega Bob Libal y para mí en Grassroots Leadership, donde a menudo nos encontrábamos entre la defensa de la inmigración y la justicia penal, DWN fue un salvavidas.

También comenzó a surgir un movimiento orgánico de jóvenes indocumentadas que luchaban contra los obstáculos para obtener una educación universitaria y las limitadas oportunidades de empleo. El proyecto de ley DREAM, que otorgaría estatus legal a jóvenes indocumentadas, fue presentado por primera vez en el Congreso en 2001, y variaciones del mismo continúan siendo un sitio clave de defensa para los "Dreamers" (soñadores). Neidi Domínguez ayudó a organizar un grupo en su campus mientras estudiaba en la Universidad de California, Santa Cruz, para apoyar a jóvenes y trabajadores inmigrantes. Ella explica el crecimiento de la base juvenil: "En todo el estado, muchos estudiantes estaban organizando para crear estos grupos de apoyo en el campus. Eventualmente hubo alrededor de 32 grupos diferentes en todo el estado."⁵ Con el apoyo de la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA, por sus siglas en inglés), formaron la Red Juvenil de Inmigrantes de California, más tarde, se fundó una red nacional, United We Dream para "trascender el marco de la CIR y un enfoque estrecho en la legislación, y en su lugar construir un movimiento sostenible liderado por jóvenes indocumentadas."⁶



El 16 de diciembre de 2005, la Cámara aprobó la HR 4437, la Ley de Control de la Inmigración Ilegal, Protección de Fronteras y Antiterrorismo (comúnmente conocida como la Ley Sensenbrenner en honor al representante Jim Sensenbrenner de Wisconsin, quien la introdujo). Las disposiciones en la HR 4437 eran tan severas—entre ellas, hacer

que ser indocumentado en Estados Unidos fuera un delito grave—que llevaron a cientos de miles de personas, principalmente comunidades de inmigrantes Latines, a las calles en oposición. Las movilizaciones más grandes tuvieron lugar en Los Ángeles y Chicago en la primavera de 2006, pero más de 200 ciudades y pueblos de todo el país organizaron marchas y manifestaciones.⁷

Para cualquiera que trabajaba en derechos inmigrantes en ese momento, fue un momento inolvidable. En Austin, las protestas estudiantiles contra el proyecto de ley obligaron a las organizaciones locales a coordinarse mejor para las marchas. En mi rol en Grassroots Leadership, ayudé a organizar dos grandes movilizaciones el 10 de abril y el 1 de mayo de 2006. Los medios de comunicación en español locales promovieron los eventos, atrayendo a miles de personas a las calles en unas de las protestas más grandes que Austin había visto desde la Guerra de Vietnam. La gente coreaba "El pueblo unido jamás será vencido" y "Aquí estamos y no nos vamos". El 10 de abril, hablé frente al Capitolio del estado ante una multitud de más de diez mil personas.⁸ Recuerdo estar en el podio dando un discurso sobre el crecimiento de la detención en Texas. Hablé sobre la súper cárcel de Laredo y lo que el proyecto de ley podría hacer si se convertía en ley, y pedí el fin de la detención y las deportaciones. A medida que surgían imágenes de otras marchas en todo el país, apenas podíamos creerlo; millones de personas estaban en las calles exigiendo justicia para inmigrantes. Se sintió como un punto de inflexión.

Las movilizaciones contra el proyecto de ley Sensenbrenner fueron precisamente eso: un rechazo defensivo al proyecto de ley y a la creciente agenda nativista en el Congreso. Pero muchas de las acciones también estaban dirigidas a un mensaje centrista que abogaba por la CIR y no reconocía abiertamente los daños de la detención y la

deportación. Durante las movilizaciones, muchos de los que marchaban se comprometieron con la "política de respetabilidad", promoviendo el nacionalismo, la inocencia y la productividad de los inmigrantes. A nivel nacional, grupos con sede en Washington, DC, como el Center for Community Change, llamaron a las acciones "We are America" (Somos América). La académica abolicionista Angélica Cházaro argumenta que los defensores de la CIR en el movimiento hicieron "todo lo posible para mejorar la reputación de la gente indocumentada y distanciarles de los 'criminales' a través de constantes apelaciones a la naturaleza trabajadora y que respeta la ley de los inmigrantes."⁹ A lo largo de las movilizaciones, los manifestantes llevaban banderas estadounidenses y sostenían pancartas que decían "Somos trabajadores, no criminales."

El objetivo principal de las organizaciones del Beltway seguía siendo la legalización. Los inmigrantes con condenas penales no solo fueron los primeros en ser sacrificados, también fueron vistos a menudo como un obstáculo directo para la reforma. Andrea Black, directora ejecutiva fundadora de DWN, me dijo que en una manifestación en DC, las organizaciones centradas en la CIR estaban tan preocupadas por asociarse con inmigrantes que tenían condenas penales que se retiraron abruptamente de un evento de prensa patrocinado por DWN la noche anterior a la manifestación. DWN siguió adelante con el evento, destacando las historias de inmigrantes y sus familias afectadas por el sistema legal penal. Al día siguiente, miembros de DWN lucharon con éxito por ser incluidos en la lista de oradores en la manifestación de la CIR (aunque se les dijo que no mencionaran la criminalización). Fue una pequeña victoria para defensores que luchaban contra la detención y las deportaciones.

Además de las tensiones dentro del movimiento, ciertos demócratas en

el Congreso estaban preocupados por la tendencia hacia la derecha en los desarrollos de la Ley de Reforma Migratoria Integral. En una escena increíble capturada en "Cómo Funciona la Democracia Ahora", durante el fallido proceso de la CIR en 2007, el senador demócrata de Nueva Jersey, Robert Menéndez, reprende a defensores de la inmigración en Washington por su disposición a hacer concesiones extremas para lograr que algo fuera aprobado. Comienza expresando preocupaciones sobre el estado del proyecto de ley: "Parece que hemos regateado en una negociación en la que todas las cosas que podrían moderarlo son píldoras venenosas, puntos de ruptura". Continúa abordando el papel de defensores: "Tengo que decir que estoy decepcionado con todos ustedes. Y creo que la razón por la que estamos en esta posición, siendo muy honesto con ustedes, es porque en el deseo de obtener algo, todos han estado dispuestos a ceder y ceder, y hemos terminado siendo un saco de boxeo en el proceso."¹⁰

Alto Arizona y el Movimiento Dreamer

Más que en cualquier otro lugar del país, el estado de Arizona llegó a definir la lucha por los derechos inmigrantes durante el primer mandato de Obama como presidente. El asalto del Sheriff Joe Arpaio a las comunidades inmigrantes se convirtió en un punto focal para el movimiento. A través del programa 287(g) que otorgaba a diputadas del condado de Maricopa autoridad migratoria federal, miles de inmigrantes fueron amontonados y detenidos en una cárcel de ciudad de tiendas de campaña inhumana y sofocante. En ese momento, NDLON había estado trabajando con Salvador Reza y Carlos García de Puente para plantear preocupaciones con el DHS sobre el programa. En una reunión

con defensores de la inmigración, incluido Chris Newman de la NDLOM, Obama mencionó los problemas del 287(g) y luego insistió en que, a pesar de sus problemas, era necesario que la CIR se aprobara. Una vez más, Obama estaba argumentando a favor del "gran acuerdo" y aumentando la aplicación de la ley en un esfuerzo por lograr la legalización. Estas tensiones en torno a la colaboración entre ICE y la policía en las comunidades inmigrantes se complicaron aún más con el nombramiento de Obama de Janet Napolitano como secretaria de DHS. Como exgobernadora de Arizona, ella tenía una relación amistosa con Arpaio. Arpaio la había respaldado en su primera postulación como gobernadora. Napolitano a menudo había guardado silencio sobre las iniciativas antiinmigrantes de Arpaio y evitaba intervenir.¹¹ Pasaron casi tres años para que finalmente revocara el acuerdo del 287(g) con Arpaio, y solo lo hizo después de una considerable presión de activistas y abogados.

Secure Communities (Comunidades Seguras), que Bush inicialmente implementó como un programa piloto en 2008, ya estaba en el radar de NDLOM cuando la administración de Obama decidió convertirlo en la piedra angular de sus reformas al sistema de aplicación de la ley de inmigración. A principios de 2010, la NDLOM presentó una solicitud de la Ley de Libertad de Información con el apoyo del Centro por los Derechos Constitucionales para comprender mejor Secure Communities llamado SCOMM por activistas, y para exponer el perfilamiento racial inherente del programa. CCR había presentado recientemente una demanda colectiva federal contra la política de detención y registro racista del NYPD. Al comprender el funcionamiento interno de SCOMM, activistas por los derechos inmigrantes comenzaron a ver con más claridad las conexiones entre diferentes agencias del orden público y su enfoque en las comunidades negras y racializadas. A medida que aumentaban las deportaciones, grupos en todo el país se organizaron contra SCOMM y presionaron a estados como Illinois y Nueva York para que optaran por salir del programa. Mientras ICE proporcionaba información contradictoria sobre si el programa era voluntario o no, la agencia finalmente dijo que SCOMM sería obligatorio.

Mientras tanto, los estados conservadores continuaron su propio asalto a la inmigración. En abril de 2010, Arizona aprobó la SB 1070, una nueva ley que alentaba el perfil racial y la persecución penal de inmigrantes indocumentados. Fue apodada la ley de "muéstrame tus papeles" por activistas y los medios de comunicación. La combinación de la naturaleza draconiana de la SB 1070 con la malicia de Arpaio hacia los inmigrantes (y la habilitación por parte del gobierno federal) convirtió a Arizona en el centro cultural del movimiento y en un foco de intervención activista. Esa organización eventualmente obligaría a la administración Obama a tomar finalmente medidas ejecutivas.

Si fuiste activista por la justicia de inmigrantes durante este período, hay una buena probabilidad de que en algún momento hicieras el viaje a Arizona para mostrar apoyo, y habrías salido con carteles de "Alto Arizona" y una camiseta de "Legalize Arizona". Comunidades en todo el país organizaron protestas de solidaridad. Varios alcaldes, incluidos en Los Ángeles y Minneapolis, ordenaron a empleados de la ciudad boicotear al detener cualquier viaje a Arizona. Músicos famosos como Shakira hablaron en contra de la ley, y otros se unieron a Sound Strike, que tenía artistas boicoteando conciertos y otros eventos en el estado, organizados por el líder de Rage Against the Machine, Zack de la Rocha.¹² En el Día del Trabajador, después de que se aprobara la ley, se realizaron manifestaciones en más de setenta ciudades.¹³ Más tarde ese mes, decenas de miles marcharon por las calles del centro de Phoenix, exigiendo la derogación de la SB 1070. Puente mantuvo la presión sobre Obama en la marcha. Salvador Reza habló en la manifestación: "Si Obama permite que esto se pudra, vamos a tener boicots contra Estados Unidos, al igual que con Sudáfrica en el apartheid. Espero que no llegue a eso, pero si lo hace, será responsabilidad de Obama."¹⁴ El Centro para el Progreso Americano estimó que el boicot a Arizona había costado a la industria turística del estado \$141 millones dentro de los seis meses posteriores a la aprobación de la ley.¹⁵

Mientras la NDLP, Puente y sus aliadas continuaron sonando las alarmas sobre la política federal de inmigración y su relación con la SB 1070, grupos que abogan por la CIR vieron la atención en Arizona como una oportunidad para impulsar su agenda. Frank Sharry, ahora

en la organización de comunicaciones America's Voice, escribió en un artículo de opinión: "Que los gobiernos estatales y locales aprueben leyes que inviten a la discriminación contra ciudadanos y residentes legales que resulten ser latines es el camino equivocado. Que el Congreso promulgue una reforma migratoria integral que elimine la inmigración ilegal es el camino correcto."¹⁶ La formulación de Sharry afirmaba la narrativa bipartidista de que la "inmigración ilegal" es un problema que necesita ser resuelto, pero que era responsabilidad del gobierno federal, no del estado de Arizona. La administración de Obama estuvo de acuerdo con esta línea de pensamiento. Finalmente, después de numerosas protestas, boicots y demandas contra la SB 1070, el Departamento de Justicia demandó a Arizona en julio de 2010 argumentando que era responsabilidad del gobierno federal supervisar la ley de inmigración.

El caso eventualmente llegó a la Corte Suprema. La periodista legal Linda Greenhouse notó lo "profundamente deprimentes" que fueron los argumentos orales: "Muchos seguidores casuales de este caso, *Estado de Arizona contra Estados Unidos*, sin duda asumen que tiene algo que ver con los derechos de inmigrantes indocumentados. Como dejaron en claro los argumentos, no lo tiene. La pregunta, más bien, es cuál de los dos soberanos, los Estados Unidos o el estado de Arizona, tiene el derecho de dificultar la vida de inmigrantes."¹⁷



El verano de 2010 fue un punto de inflexión no solo para quienes que se oponían al aumento en la aplicación de la ley, sino también para el movimiento juvenil inmigrante, cuyos miembros se frustraban más con el debate sobre la Ley de Reforma Migratoria Integral (CIR). A principios de año, Tania Unzueta, una organizadora indocumentada de la Liga de Justicia de Jóvenes Inmigrantes en Chicago, organizó el primer Día Nacional de Salir de las Sombras. Les jóvenes inmigrantes, tomando una página del movimiento queer, estaban "saliendo del clóset" como "indocumentados y sin miedo."¹⁸ Mientras que la narrativa convencional sobre los Dreamers (una generación de activistas asociada con la acta DREAM) a menudo les posicionaba en la "política de

respetabilidad", como jóvenes inocentes y trabajadores que llegaron a Estados Unidos "sin culpa propia", activistas juveniles inmigrantes comenzaron a interrumpir este marco y a criticar el sistema de deportaciones en su totalidad. Unzueta explicó que una visita a Arizona la ayudó a ver que "la estrategia antiinmigrante de desgaste [era] para hacer la vida cotidiana difícil a través de leyes y políticas que, por ejemplo, bloquean el acceso de inmigrantes indocumentados a servicios públicos, patrullas policiales y redadas en barrios latinos, acoso a jornaleros por parte de la patrulla fronteriza". Comprender el alcance de la aplicación de la ley la ayudó a ver las limitaciones de la CIR. Ella y otros Dreamers habían comenzado a impulsar una propuesta de ley DREAM independiente.¹⁹

Los grupos de la periferia de Washington fueron menos solidarios con la decisión de los Dreamers de seguir su propio camino, temiendo que luciera mal para su estrategia de CIR. Neidi Domínguez describe las reacciones: "Recibimos muchas críticas, desde la derecha, desde la izquierda, desde el centro. Hubo artículos... llamándonos niños petulantes que solo nos preocupábamos por nosotros mismos. [Nosotros] recibíamos llamadas de sindicatos internacionales a otros líderes o defensores de derechos inmigrantes en el campo para que hablaran con nosotros, para apaciguarnos."²⁰ A pesar de esto, los Dreamers siguieron adelante ese verano. Los activistas comenzaron a posicionarse en las oficinas del Congreso, vigilando los eventos políticos y organizando autobuses y marchas desde todo el país hacia Washington DC. El movimiento juvenil inmigrante no era un monolito, y las opiniones sobre objetivos y tácticas variaban, pero tanto activistas juveniles inmigrantes como aquellos que luchaban contra la implementación (dos grupos que a menudo se superponían) comenzaron a usar la desobediencia civil como una estrategia para presionar al presidente Obama y a Congresistas para que tomaran medidas.

En el otoño de 2011, un grupo radical de activistas juveniles inmigrantes intensificó sus tácticas y comenzó a "infiltrarse" en centros de detención. La Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes (NIYA, por sus siglas en inglés) organizó lo que llamaron "invasiones", en las cuales un activista juvenil indocumentado se presentaba en un centro de

detención para ser detenida como estrategia para afirmar su propia agencia. Marco Saavedra, un organizador de NIYA que fue detenido voluntariamente en el Centro de Detención de Broward, fuera de Miami, explica: "Cambiamos la dinámica de poder y mostramos que somos nosotros quienes dictamos nuestro futuro. No es que ICE tenga la opción de detenernos; nosotros estamos dictando si permitimos que nos detengan o no. Nosotros somos los que tenemos el control, independientemente de lo que piensen las autoridades." Una vez dentro, Saavedra y otros "infiltradores" comenzaron a comunicarse y recopilar información de otros inmigrantes detenidos para exponer cuántos de ellos podrían ser elegibles para la discreción fiscal. NIYA comenzó a librar campañas de defensa contra la deportación para los encarcelados. Los abogados en el movimiento criticaron las tácticas de NIYA, preocupados de que complicaran los casos de inmigración de las personas detenidas. A pesar de sus detractores, el grado en que los jóvenes indocumentados estaban dispuestos a ir para exponer el sistema resultó ser efectivo para arrojar luz sobre la gravedad de la política de inmigración de Obama y cómo era estar dentro de un centro de detención de inmigrantes, lo que había estado oculto al público.²¹

Después de que la ley DREAM fracasara en el Congreso, Obama se convirtió en el objetivo central de los esfuerzos de jóvenes indocumentados. Activistas juveniles inmigrantes intensificaron sus tácticas, llegando incluso a organizar ocupas en las oficinas de campaña de Obama durante el ciclo electoral de 2012. El 15 de junio de 2012, la administración Obama finalmente cedió con el anuncio de la Acción Diferida para Quienes Llegaron en su Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). DACA otorgó protección contra la deportación y autorización de trabajo a ciertos jóvenes inmigrantes. Fue una victoria resonante para el movimiento juvenil inmigrante, una que no habría ocurrido sin sus incansables esfuerzos y acciones. Pero se quedó corto en varios aspectos, como señaló Obama en su discurso anunciando DACA: "Ahora, seamos claros—esto no es amnistía, esto no es inmunidad. Esto no es un camino hacia la ciudadanía. No es una solución permanente. Esta es una medida provisional temporal que nos permite enfocar nuestros recursos sabiamente mientras brindamos un grado de alivio y esperanza a jóvenes talentosos, motivados y patrióticos."²² Además de ser

temporal y dejar fuera a muchas personas debido a restricciones de edad, el programa también excluyó a inmigrantes con delitos graves y algunos delitos menores—es decir, aquellos en los que Obama planeaba "enfocar nuestros recursos." Organizadores como Domínguez dijeron que el anuncio galvanizó al movimiento para presionar a la administración a ir más allá: "El objetivo principal era obtener protección para todos. Pensamos, si podemos hacer que él diga que merecemos protección, ¿qué argumento podrían usar para negársela a nuestros padres?"²³

Para activistas por la justicia inmigrante, el final del primer mandato de Obama resultó ser un momento crucial para los cambios abolicionistas en el movimiento. Si bien DACA fue una concesión considerable para la administración, la aplicación de la ley alcanzó niveles sin precedentes, con 478,000 personas detenidas y 419,000 personas formalmente deportadas durante el año fiscal 2012.²⁴ DWN lanzó un esfuerzo para cerrar los centros de detención (explicado en el capítulo 6), pero la organización aún no había adoptado una posición abolicionista cuando se trataba de la detención. Luego, en diciembre de 2012, después de varias conversaciones a menudo en desacuerdo dentro de la membresía, DWN adoptó una visión de un mundo sin detención, lo que sin duda ayudó a clarificar su propósito y estrategias en el futuro. Mientras tanto, NDLOM estaba ideando su próximo paso. Después de DACA, estaba claro que, aunque algunas personas estarían protegidas de la deportación, muchas más quedarían excluidas. Fue en este momento que Marisa Franco, organizadora principal de NDLOM, creó la campaña Not1More Deportation (Ni Una Deportación Más). El llamado a Not1More cambió la conversación. La deportación ya no era un hecho dado. Ni una más significaba ni una más, y si activistas se daban cuenta o no en ese momento, efectivamente estaban llamando a la abolición de la deportación.

El Proyecto de Ley del Senado y la Campaña Not1More Deportation

Aunque Obama había estado intensificando la aplicación de la ley

migratoria en el interior y la frontera durante su primer mandato, como una estratagema para aprobar la CIR, en ese momento el debate en el Congreso se centraba en gran medida en la Ley de Cuidado de Salud Asequible, y debido a la oposición republicana, el proyecto de ley de CIR nunca avanzó. La victoria de Obama en 2012, con un notable apoyo de votantes Latines, significaba que los grupos de derechos inmigrantes finalmente tendrían otra oportunidad de asegurar la legalización. Varias organizaciones por los derechos inmigrantes con sede en Washington DC—como America’s Voice, NCLR y el Center for Community Change, entre otras—formaron la Alianza por la Ciudadanía (A4C por sus siglas en inglés) a principios de 2013 para impulsar la legalización y centraron su atención en el Senado para presentar un proyecto de ley. Un grupo paralelo de organizaciones, incluidas DWN y NDLO, se unieron para contrarrestar las disposiciones de aplicación que inevitablemente acabarían en un proyecto de ley de CIR, aunque con recursos limitados no pudimos tener ninguna influencia significativa en el debate.

La demanda central de A4C era un camino hacia la ciudadanía, pero un punto adicional en sus principios incluía la aplicación: "Asegurar que las medidas de aplicación protejan a trabajadores estadounidenses e inmigrantes, promuevan el debido proceso y el trato justo, y sean consistentes con los valores estadounidenses".²⁵ El mensaje de A4C estaba en línea con lo que las encuestas repetidamente decían a defensores de los derechos inmigrantes: que para convencer al público estadounidense de que vale la pena apoyar la legalización, debemos ser patrióticos y promover a los inmigrantes como productivos y trabajadores. A menudo, expertos en comunicaciones de estas organizaciones disuadían al resto de nosotros de hablar sobre por qué había una gran población de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos debido a los pobres resultados de dicha controversia. La historia de las guerras respaldadas por Estados Unidos en otras partes del mundo, las políticas neoliberales como el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas en inglés) y su impacto en la migración eran temas que no debíamos sacar a discutir.

En el Senado, cuatro demócratas y cuatro republicanos conocidos como la "Banda de los Ocho" se unieron para redactar el proyecto de ley de CIR. El 16 de abril de 2013, el senador demócrata de Nueva York, Chuck Schumer, presentó el S.744, la Ley de Modernización de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Migración, copatrocinada por el resto de la banda. Era un proyecto de ley descomunal—con más de 800 páginas. En cuanto a la legalización, aunque incluía un camino hacia la ciudadanía, hubiera tomado trece años en total para que inmigrantes indocumentados alcanzaran la ciudadanía. Aquellos que hubieran sido condenados por un delito grave o tres delitos menores no serían elegibles.²⁶ En cuanto a la aplicación en la frontera, el proyecto de ley incluía \$6.5 mil millones adicionales para el DHS para "aumentar la aplicación y extender la valla a lo largo de la frontera suroeste". También requería que los programas de seguridad fronteriza estuvieran en funcionamiento antes de que inmigrantes indocumentados pudieran solicitar tarjetas de residencia.²⁷ A pesar de estas y otras disposiciones antiinmigrantes, la mayoría de los grupos por derechos inmigrantes celebraron la presentación del proyecto de ley, aceptaron disposiciones desfavorables porque la legalización masiva estaba sobre la mesa. Para muchos defensores, era un compromiso—el "sándwich de mierda" o la "píldora amarga" que tendríamos que tragar.

Entonces, en junio, días antes de que el proyecto de ley fuera sometido a votación, los senadores republicanos Bob Corker y John Hoeven presentaron una enmienda del "aumento militar de la frontera". Tomaron la parte de aplicación en la frontera del proyecto de ley y la aumentaron de \$6.5 a \$46 mil millones. Duplicaría el número de agentes de la patrulla fronteriza a 38,000, construiría aún más vallas en la frontera y aumentaría el uso de drones y otras tecnologías de vigilancia.²⁸ También triplicaría los enjuiciamientos por ingreso ilegal a través de la Operación Streamline en Tucson a 210 personas al día.²⁹ Fue una perspectiva aterradora. La mayoría de las organizaciones de derechos de inmigrantes, incluso aquellas asociadas con A4C, expresaron preocupaciones al respecto, pero de todos modos fue aprobada en el Senado y se incluyó en el proyecto de ley final. El 27 de junio de 2013, el Senado aprobó el S.744 con un voto de 68–32 a favor.

El movimiento estaba dividido. Para los grupos de A4C, fue una victoria a pesar de las medidas de aplicación en la frontera sobredimensionadas. Muchos defensores de la CIR estuvieron presentes en el Senado el día de la votación, celebrando y coreando "¡Sí se puede!", el lema de la campaña de Obama, tras su aprobación.³⁰ En un comunicado, el NCLR dijo que, aunque no era "perfecto", "entregaba una solución real a nuestro sistema de inmigración roto."³¹ Ali Noorani del NIF expresó que se esperaba un aumento en la aplicación para un esfuerzo bipartidista: "Este proyecto de ley tiene algunos puntos realmente difíciles. Algunas [partes] del movimiento sienten que no es parte del precio de admisión. Pero ganar legislación bipartidista significa que no todos estarán contentes."³² Para otros, la enmienda Corker-Hoeven fue un paso de más; algunos grupos, incluido DWN, se manifestaron en contra del proyecto de ley. Gerald Lenoir, director ejecutivo del Black Alliance for Just Immigration, argumentó que la aprobación del proyecto de ley señalaba problemas sistémicos más grandes: "Para aquellos que elogian el proyecto de ley del Senado como 'histórico', digo, sí, es histórico de una manera distorsionada. Esta Guerra contra inmigrantes, continúa la tendencia general de militarización de la sociedad estadounidense en su conjunto bajo el pretexto de la Guerra contra el Terrorismo y la Guerra contra las Drogas."³³

En muchos aspectos, la enmienda Corker-Hoeven fue un indicio de lo que vendría en el discurso sobre inmigración. Desde su aprobación, la "crisis" en la frontera ha impulsado las decisiones políticas sobre inmigración más que cualquier otra cosa. Si bien el poder del movimiento para asegurar la legalización ha disminuido desde entonces, la presión para una mayor militarización en la frontera solo ha crecido. Después de que el proyecto de ley del Senado fuera aprobado, el periodista Benjy Sarlin llamó al deseo de conceder para la legalización el "secreto sucio" de los demócratas, diciendo que mientras la legalización esté incluida en un proyecto de ley, "los demócratas aceptarán cualquier demanda sobre seguridad fronteriza—sin importar lo arbitraria y equivocada que sea."³⁴ Aunque los comentarios de Sarlin estaban centrados en los demócratas en el Congreso, lo mismo podría decirse de las organizaciones que presionaban por la CIR. La suspensión de los grupos

involucrados en A4C a aceptar la enmienda del "aumento militar de la frontera" dio a demócratas un pase cuando se trataba de un aumento en la aplicación de leyes en la frontera, abriendo espacio para que republicanes avancen con su agenda nativista.

A medida que el debate sobre la reforma migratoria se llevaba a cabo en el Congreso, la campaña Not1More se lanzó para presionar a Obama a poner fin a las deportaciones. La campaña tenía un alcance amplio. Exigía el fin del programa 287(g) y de Secure Communities, así como de Operación Streamline y las persecuciones masivas que tenían lugar en la frontera, acercando la brecha entre el trabajo interior y fronterizo. También exigía la expansión de DACA y la discreción fiscal para que más personas estuvieran protegidas contra la deportación. Fue una afrenta intencional al marco de la CIR. Los organizadores lo expresaron así: "El movimiento fue diseñado no en torno a abogar por aquellos en nuestros movimientos que eran más agradables para la corriente dominante de EE. UU., sino en torno a aquellos que fueron criminalizados y fácilmente descartados por una máquina de comunicaciones centrada en inmigrantes "trabajadores" que "no eran criminales."³⁵ A medida que crecía el llamado por Not1More, tuvieron lugar acciones de #Shut-DownICE (Derrocar ICE, en español) en todo el país, que incluyeron una variedad de tácticas: despliegues de pancartas, seguimiento de eventos políticos y acciones de desobediencia civil fuera de centros de detención y oficinas de ICE.

DWN había estado trabajando regularmente con NDLON a lo largo de los años, y a medida que crecía Not1More, coordinábamos para apoyar a grupos locales que trabajaban para amplificar las exigencias de inmigrantes que se declaraban en huelga de hambre en centros de detención. En octubre de 2013, asistí a un encuentro de la campaña Not1More en Phoenix (pasábamos mucho tiempo en Arizona en esos días). En algún momento, una mujer se puso de pie y comenzó a hablar con convicción sobre el Grupo GEO y las condiciones en el Centro de Detención del Noroeste (NWDC) en Tacoma, Washington. Si bien la detención era parte de la conversación, no era el foco central de estos espacios de organización, y supe que tenía que presentarme a ella. Resultó que la

mujer que hablaba era Maru Mora Villalpando, quien estaba organizando en Seattle con el grupo Resistencia al NWDC para apoyar a inmigrantes detenidos. La organización que se basaba en torno al NWDC, se centraba en coordinarse con inmigrantes detenidos, proporcionó un nuevo enfoque para las campañas anti detención y anti deportación durante el segundo mandato de Obama.

Una táctica que empleó Not1More fue bloquear autobuses fuera de centros de detención o sitios de deportación para evitar que se llevaran a cabo deportaciones. Activistas de Not1More organizaron manifestaciones #ShutDownICE para detener los autobuses de deportación en todo el país. En febrero de 2014, en el frío y húmedo invierno del Pacífico Noroeste, diez organizadores de La Resistencia se tomaron de las manos y formaron una cadena humana, bloqueando la entrada del centro de detención. Los organizadores lograron detener un autobús y dos furgonetas que llevaban a cabo deportaciones, evitando la deportación de 120 inmigrantes. La protesta galvanizó a inmigrantes detenidos en NWDC: dos semanas después, al menos 750 inmigrantes comenzaron una huelga de hambre protestando por las condiciones de detención. Las huelgas de hambre comenzaron a extenderse a otros centros de detención en todo el país.³⁶

La decisión de situar las acciones de desobediencia civil de Not1More en los centros de detención ayudó a hacer más visible el sistema de detención de inmigrantes para el movimiento. En su mayoría, las personas sentían el impacto de ICE llevándose a sus seres queridos, pero el papel de la detención de inmigrantes había permanecido oculto para el público y el movimiento más amplio de derechos inmigrantes. Con estas acciones, algo comenzó a hacer clic, y más grupos empezaron a ver la conexión entre la detención y el proceso de deportación.



Las intervenciones a nivel local y estatal para frenar la aplicación de la ley de inmigración, a menudo denominadas políticas de santuario, se convirtieron en una forma importante de reducir las vías que llevan a la deportación y de presionar al gobierno durante este período. En

2011, la coalición ICE Out of California (ICE Fuera de California) se unió para evitar los efectos completos de Secure Communities. Durante los años de Obama, aproximadamente el 70 por ciento de las detenciones de ICE se habían llevado a cabo en prisiones o cárceles.³⁷ Cortar la capacidad de ICE para enfocarse en inmigrantes a través del sistema legal penal sería esencial para limitar las deportaciones. La coalición se centró en prevenir las retenciones, que permiten a las agencias del orden público detener a inmigrantes incluso después de que sean elegibles para ser liberados, para que ICE pueda arrestarlos y ponerles en detención migratoria. La coalición apoyó la introducción de TRUST Act (Acta de Confianza), que limitaría el uso de las retenciones en California. Inicialmente, la legislación no logró avanzar, pero la coalición comenzó a trabajar con localidades para optar por salir de Secure Communities y movilizó el apoyo local en todo el estado. Organizadores locales ejercieron presión sobre alguaciles y otras entidades locales para poner fin a los acuerdos con ICE y construyeron un creciente apoyo popular.

El cambio en el terreno local ayudó a abrir espacio a nivel estatal y, dos años más tarde, en 2013, el Acta de Confianza (TRUST Act) se convirtió en ley. Al firmarla y otras leyes relacionadas con la inmigración, el gobernador Jerry Brown proclamó: "Mientras Washington divaga en cuanto a la inmigración, California avanza. No estoy esperando."³⁸ Dentro del primer año de la aprobación de la ley, el uso de retenciones para transferir a inmigrantes a la custodia de ICE disminuyó en un 44 por ciento.³⁹ Eventualmente, en respuesta a la resistencia local y estatal a Secure Communities, la administración de Obama puso fin al programa. (Luego, la administración lanzó un nuevo programa para intentar abordar las preocupaciones planteadas, aunque activistas por la justicia inmigrante señalaron las similitudes con Secure Communities y lo desestimaron como un esfuerzo de reciclar el programa bajo diferente nombre.)



A principios de 2014, quedó claro que la CIR había fracasado una vez más, sin esperanza de que un proyecto de ley avanzara en la Cámara controlada por republicanes. Los grupos de A4C estaban creciendo frustrados con la falta de acción por parte de la administración Obama mientras las deportaciones formales alcanzaban los dos millones

durante su mandato. Si bien la campaña de Not1More a menudo era vista como una molestia por muchas de las organizaciones establecidas de derechos inmigrantes, ya que la CIR no iba a ningún lado, algunos comenzaron a adoptar el mensaje de Not1More. En marzo, Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza, habló en una cena de recaudación de fondos: "Para el presidente, creo que aquí está en juego su legado. Lo consideramos el presidente de las deportaciones, o el deportador en jefe."⁴⁰ Esto era algo que NDLOM y los grupos afiliados llevaban diciendo desde hacía tiempo, y para el verano, Obama estaba recibiendo críticas de todos los lados. Los grupos de CIR y los que luchaban contra el cumplimiento exigían acción ejecutiva. Mientras tanto, los republicanos atacaban a la administración por ser blandos en inmigración cuando aumentaba el número de familias que llegaban a la frontera. En respuesta, cinco años después de terminar la detención familiar en Hutto, Obama le dio la espalda al tema, ya que más familias llegaban a la frontera, expandiendo la capacidad para detener a padres con sus hijos una vez más.

En noviembre de 2014, después de la presión continua de activistas de Not1More y el fracaso del CIR, Obama anunció la implementación de la Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA). El discurso, al menos en algunas partes del movimiento, ha llegado a ser conocido como el infame discurso de "criminales, no familias" (ver capítulo 2). DAPA habría otorgado estatus a padres de niños ciudadanos estadounidenses o de aquellos con estatus de residente legal, pero, antes de que pudiera entrar en vigor, Texas y otros estados entablaron demandas, bloqueando su implementación. Para muchos de nosotros que trabajamos para poner fin a las deportaciones y detenciones, el discurso sólo confirmó el compromiso de Obama con la criminalización. Al señalar a los "criminales" y a los "pandilleros", Obama reforzó el marco de inmigrantes buenos versus los inmigrantes malos. Luego, su administración amplió la detención de familias, encerrando a casi 3.000 inmigrantes, incluidos niños y bebés, en nuevas cárceles de Texas bajo el pretexto de "seguridad fronteriza", revelando su hipocresía sobre el tema. El discurso, a pesar del anuncio de DAPA, fue

sólo otra confirmación de que Obama no era amigo de los inmigrantes.

Unas semanas más tarde, un gran jurado del condado de St. Louis decidió no acusar al oficial de policía de Ferguson, Darren Wilson, por el asesinato de Michael Brown, de dieciocho años. Una vez más, manifestantes de Black Lives Matter llenaron las calles de todo el país. En una declaración para NDLON, Marisa Franco se lamentó: “Hace apenas unos días, el presidente Obama anunció ayuda para las familias, pero no para delincuentes. ¿Pero cuáles son esos términos en el contexto de Ferguson? ¿Cuándo nuestras comunidades ya son consideradas criminales? ¿Cuándo se juzga a los asesinados? ¿Y las fuerzas policiales como la de Ferguson son los árbitros de esta ‘nación de leyes’?»⁴¹

A medida que las protestas de Black Lives Matter se extendieron por todo el país, United We Dream (UWD) comenzó a conectarse con grupos del movimiento más amplio por la justicia racial, incluidos Dream Defenders y Black Youth Project 100. Los jóvenes líderes racializados se unieron para formar Freedom Side (el Lado de la Libertad), un homenaje al Verano de la Libertad de la era de los derechos civiles, para amplificar las exigencias que se extienden entre las comunidades racializadas: poner fin al camino de la escuela a la prisión, poner fin a las deportaciones, garantizar la educación pública para todos y el derecho al voto, etc. ⁴² Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de UWD, describe la formación como un momento crucial para que la organización entendiera la lucha de jóvenes inmigrantes como una lucha abolicionista: “Agudizó nuestro análisis, fue ponerle una palabra a lo que habíamos estado haciendo todo el tiempo .”

Cuando el mandato de Obama llegó a su fin y Trump se volvió omnipresente, se formaron nuevas organizaciones que abrazaron el aspecto de justicia racial de la lucha por derechos inmigrantes, en contraste con los grupos del establecimiento que lo evitaban. En 2015, Franco y otros

organizadores de Not-1More formaron Mijente para crear un hogar político y “para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo y responder a las crecientes amenazas a la comunidad latina”.⁴⁴ Y en enero de 2016, la organización UndocuBlack Network fue fundada con la visión de “tener movimientos pro migrantes verdaderamente inclusivos y por la justicia racial que defiendan los derechos de las personas negras indocumentadas, [y] brinden espacios de sanación y comunidad a aquellos con identidades que se entrelazan”.

El movimiento por los derechos inmigrantes después de Trump

Para muchos de nosotros en el movimiento por los derechos inmigrantes, despertar el día después de las elecciones de 2016 fue una reminiscencia de cuando nos enteramos por primera vez de los ataques del 11 de septiembre quince años antes. Era imposible no temer por las comunidades de inmigrantes que soportarían la peor parte de los cambios de política interna que estaban a punto de producirse. Si bien a menudo se ve a Trump como una aberración, simplemente sacó a relucir el racismo existente en el sistema para que el mundo lo viera. Pero, aun así, el ataque de su administración a inmigrantes fue implacablemente cruel. Desde el primer día, la agenda de Trump fue clara: castigar a inmigrantes en la mayor medida posible y mantenerles afuera a toda costa. La era Trump impulsó al movimiento por los derechos inmigrantes a afinar su análisis y adaptar sus estrategias para ir más allá del marco de la legalización. Sin embargo, tener que negociar constantemente la avalancha de ataques fue abrumador, por decir lo menos, y el movimiento ha tenido dificultades después de ello.

Los defensores del CIR estaban perdidos cuando Trump asumió la presidencia. Con los republicanos en control de la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes, las estrategias del Congreso eran pocas y espaciadas. Para quienes luchan contra la aplicación de la ley, este cambio político proporcionó una apertura interesante en el Congreso en torno al papel del presupuesto federal, que analizo en el capítulo 5. Pero para

otros que habían pasado años centrados en ganarse el favor de les demócratas en el Congreso y la administración Obama, fue un momento desorientador. Muchas organizaciones centraron su atención en los litigios defensivos como herramienta para hacer frente a algunas de las políticas más duras de Trump (como la prohibición musulmana), pero las estrategias legales sólo podían llegar hasta cierto punto, dada la naturaleza conservadora de los tribunales. Otros finalmente se centraron en desacreditar las narrativas racistas y xenófobas provenientes de la administración.

El mayor cambio del movimiento fue el giro hacia estrategias a nivel estatal y local, que muchos grupos ya habían estado empleando. Gracias a la presión de organizadores y defensores locales durante los años de Obama, muchas ciudades y estados comenzaron a implementar políticas santuario como la Ley TRUST. Estos límites a la relación de ICE con las autoridades locales protegieron a algunos inmigrantes de la detención y deportación. Las políticas santuario combinadas con la implementación de DACA y otras formas de ayuda ayudaron a reducir los arrestos internos de ICE hacia el final del segundo mandato de Obama de casi 300.000 en 2009 a 110.000 en 2016.⁴⁶

Cuando Trump asumió el cargo en 2017, inmediatamente restableció Secure Communities y otorgó a ICE licencia para atacar a todos los inmigrantes, alejándose del concepto de prioridades de aplicación de la ley. También recurrió a una de las tácticas más crueles de George W. Bush: hacer que ICE realizara redadas masivas contra trabajadores inmigrantes. Una de los más grandes tuvo lugar en Mississippi en 2019, cuando ICE allanó plantas procesadoras de pollo en seis ciudades el primer día de clases. ICE arrestó a 680 trabajadores inmigrantes, dejando a muchos de sus hijos atónitos y aterrados. Unos 300 inmigrantes fueron liberados, pero el resto fueron detenidos en el cercano Centro Correccional del Condado de Adams en Natchez, Mississippi, y en otros centros de detención en Luisiana.⁴⁷ La redada y la crueldad del ICE galvanizaron a

las comunidades de inmigrantes en Mississippi, y poco después a las autoridades locales. En respuesta, se formó el grupo Alianza de Inmigrantes por la Justicia y la Equidad.

A pesar de los esfuerzos de Trump por infundir miedo en las comunidades de inmigrantes, las deportaciones formales no se dispararon. De hecho, en el informe anual de 2019 de ICE, la agencia señaló que “uno de los mayores impedimentos para [sus operaciones de aplicación de la ley] fue la falta de cooperación de un número cada vez mayor de jurisdicciones en todo el país”.⁴⁸ Si bien las redadas continuaron, el número de deportaciones de quienes actualmente viven en Estados Unidos no lograron alcanzar los niveles de la era Obama debido a las exitosas campañas para limitar la colaboración entre ICE y la policía en estados con grandes poblaciones de inmigrantes, como California y Nueva Jersey. El movimiento había logrado detener un aumento en las deportaciones formales en el interior del país durante el gobierno de Trump al bloquear el alcance del sistema legal penal en las comunidades inmigrantes.

La frontera era otra historia. Al final de la administración Obama, las detenciones en la frontera habían aumentado y ICE estaba deteniendo a cuarenta mil inmigrantes en un momento dado, la capacidad más alta que el sistema jamás había alcanzado. Las personas que llegaban a la frontera en busca de asilo pasaban meses encarceladas, a pesar de haber pasado controles que deberían haberles permitido ser liberadas. Las organizaciones humanitarias y contrarias a la aplicación de la ley criticaron el enfoque de Obama, al igual que aquellas con base en la región fronteriza, pero para la mayoría del movimiento, las leyes fronterizas no era una prioridad. Años de aceptar la militarización fronteriza como un hecho por parte del CIR finalmente alcanzaron al movimiento. Ahora la administración Trump había hecho de la política fronteriza draconiana la pieza central de su agenda antiinmigrante. Como resultado, muchas organizaciones del Beltway se vieron obligadas a cambiar de opinión y ya no utilizar el sistema de control de inmigración y sus innumerables

daños como moneda de cambio. Este ajuste de cuentas llevó a muchos de los grupos del CIR a reflexionar y centrarse en la visión, algo que ahora estaban abiertos a hacer con una gama más amplia de organizaciones y perspectivas, incluidos aquellos de nosotros que trabajamos contra la aplicación de la ley.

A principios de 2021, el presidente Biden asumió el cargo con un Congreso controlado por demócratas. Muchos vieron esto como otra oportunidad más para abrir un camino hacia la ciudadanía para los once millones de inmigrantes indocumentados. Pero el movimiento había cambiado y el status quo de legalización o nada había cambiado, o eso pensábamos. Varios de los grupos CIR de larga data y organizaciones laborales pro inmigrantes se unieron a líderes de movimientos más jóvenes para lanzar We Are Home, una campaña que insta a la administración de Biden y al Congreso a tomar medidas en materia de inmigración. El objetivo sería proteger a la mayor cantidad de personas posible mediante la aprobación de la legalización y la limitación de la aplicación de la ley en el interior. Debido a que era la primera vez que el movimiento dominante se había comprometido públicamente a lograr recortes a la detención y la deportación junto con la ciudadanía, el enfoque intencional en la aplicación de la ley trajo a DWN y Mijente a la mesa para garantizar que no repitiéramos los errores de esfuerzos anteriores de reforma migratoria. Fue potencialmente un importante punto de inflexión para el movimiento. Pero quedó fuera un elemento clave de la política de inmigración: la frontera. We Are Home tomó la decisión de centrarse únicamente en quienes viven actualmente en los Estados Unidos. La intención era evitar la tenue política alrededor de la frontera y mantener un enfoque limitado a lograr la legalización y las reformas internas para hacer cumplir la ley.

Para marzo de 2021, los republicanos habían retomado la narrativa en torno a la frontera, y la administración titubeó a la hora de poner fin a las políticas de la época. Muchos grupos dentro de We Are Home dudaron

en criticar a Biden porque la campaña necesitaba su apoyo total para la estrategia legislativa que estaban ejerciendo en materia de ciudadanía. Si bien existía un esfuerzo paralelo con grupos centrados en la política fronteriza y de asilo, consistía principalmente en organizaciones humanitarias y de política sin base y con poca visión sobre cómo combatir el alarmismo de la derecha en la frontera, lo que limitaba su poder para hacer retroceder a los inmigrantes contra la militarización fronteriza de Biden. We Are Home como entidad centró sus recursos en la legalización y dudó en plantear preocupaciones sobre cuestiones relacionadas con la frontera como el Título 42, la política de Trump (continuada por Biden) que resultó en expulsiones masivas de personas que buscaban asilo en la frontera.

El hecho de que un gran contingente del sector convencional del movimiento por los derechos inmigrantes apoyara una reducción de las detenciones y deportaciones dio peso a la demanda, pero muchos de nosotros pronto nos sentimos frustrados por la falta de inversión de We Are Home en el aspecto contrario a la aplicación de la ley de la campaña. Con el enfoque central una vez más en la legalización, We Are Home gastó la mayor parte de su energía y dinero tratando de lograr que se aprobara algo a través del proyecto de ley Build Back Better de Biden, que finalmente fracasó. Si bien muchos creían que una política de inmigración posterior a Trump sería más acogedora y solidaria para inmigrantes, dado lo draconiana que había sido la administración de Trump y los compromisos de Biden durante la campaña electoral, resultó ser todo lo contrario. Las reformas significativas a la inmigración fueron pocas y espaciadas, en gran parte porque los demócratas temían que el tema les perjudicara en las elecciones de mitad de período. Al final, We Are Home no logró asegurar la legalización, una vez más, y las perspectivas de hacerlo en el futuro se sintieron aún más limitadas que veinte años antes, cuando se propuso por primera vez la CIR.

La lección más importante aquí es que dar prioridad a la ayuda para

algunos inmigrantes a costas de otros inmigrantes en última instancia ha hecho más daño que bien. La continua disposición de los principales grupos del CIR y de los demócratas del Congreso a ceder terreno en materia de aplicación de la ley no ha hecho más que reforzar los marcos mediante los cuales ambos partidos discuten sobre la inmigración. Años después, la legalización sigue estando fuera de nuestro alcance y las herramientas de alivio administrativo, como DACA, están siendo cuestionadas. Pero la legalización no es el principio ni el fin de la justicia para inmigrantes. Los activistas británicos Gracie Mae Bradley y Luke de Noronha explican que “si bien las amnistías pueden brindar alivio material a un grupo de personas indocumentadas, a menos que ocurran dentro de un contexto más amplio de reformas abolicionistas de un sistema de inmigración, no hacen nada para aliviar las vidas de las personas que serán indocumentadas en el futuro, o romper con la idea de que ser ciudadano es la única manera de vivir una vida digna.”⁴⁹

Los inmigrantes pueden y deben poder vivir una vida plena, independientemente de su estatus. La privación de derechos políticos de los inmigrantes indocumentados y no naturalizados, un aspecto tácito del discurso político sobre la inmigración hace que este objetivo sea mucho más difícil. Vale la pena enfatizar que esta condición es algo que los inmigrantes comparten con millones de personas con condenas por delitos graves que tampoco pueden votar. Para remediar esta desigualdad, algunos municipios han comenzado a permitir que residentes, incluidos inmigrantes indocumentados, la posibilidad de votar en las elecciones locales. Si bien es importante recordar que votar no es la única manera de ejercer agencia política, este es un paso elogioso. Tanto a nivel local como federal, el objetivo debería ser un enfoque multifacético para garantizar los mayores derechos a los no ciudadanos. Esas acciones incluyen eliminar el miedo a la detención y deportación, abogar por un salario digno y condiciones laborales no explotadoras, brindar acceso a beneficios públicos y garantizar la posibilidad de viajar fuera de los Estados Unidos y poder regresar.

La implementación de DACA por parte de Obama ahora se considera uno de sus legados más importantes en materia de inmigración. Pero, como muestra este capítulo, fue necesario mucho para lograr que hiciera incluso eso. La existencia de DACA es un resultado directo de la desobediencia civil y la movilización organizada por jóvenes inmigrantes y quienes luchan contra la aplicación de la ley de inmigración. Los esfuerzos locales por el santuario finalmente también comenzaron a frenar las deportaciones y limitar el daño causado a las comunidades inmigrantes. A pesar de toda la voluntad política y el dinero que se invirtió en luchar por CIR, fue la organización local y la construcción de movimientos lo que comenzó a brindar alivio a las comunidades inmigrantes. Es importante tener presente esta lección a medida que abordamos nuevos desafíos. Afinar nuestro análisis de lo que está sucediendo en la frontera y el papel que juega en el discurso migratorio será fundamental para defender tanto a las personas que buscan migrar como a inmigrantes que viven en Estados Unidos.